

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	OMAIRA MARÍN HOYOS y OTROS
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-021-2018-00313-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Costas procesales, criterio objetivo para su imposición.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por las señoras **OMAIRA MARÍN HOYOS, SANDRA CRISTINA HERNÁNDEZ MARÍN, PAULA ANDREA HERNÁNDEZ MARÍN, JOHANNA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN, VALENTINA HERNÁNDEZ MARÍN, y MARÍA CAROLINA HERNÁNDEZ MARÍN** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 013**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de las demandantes, contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el día 3 de septiembre de 2019.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que al señor MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES le fue otorgada una pensión de vejez por parte del ISS hoy COLPENSIONES a través de la resolución N° 105319 del 14 de junio de 2012, a partir del 1° de junio de 2012, y al no estar de acuerdo con la fecha de disfrute pensional, el presentó el recurso de reposición correspondiente, solicitando el reconocimiento y pago del retroactivo pensional a partir del mes de junio de 2011, pues para ese ciclo fue reportada la novedad de retiro por parte de su empleador “CONTEGRAL”.

La entidad accionada, resolvió desfavorablemente la solicitud de retroactivo pensional, a través de las resoluciones N° 118976 del 3 de abril de 2014, GNR-573 del 5 de mayo de 2015, y GNR-2960 del 6 de enero de 2016.

Finalmente aduce el escrito introductorio, que el señor MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES falleció el día 14 de marzo de 2016, sin recibir el retroactivo pensional al que tenía derecho, y por ello las aquí demandantes en sus calidades de cónyuge e hijas, se encuentran legitimadas, para reclamar su reconocimiento por la vía judicial.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare que el SEÑOR MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES, tiene derecho a la liquidación del retroactivo pensional desde el 1° de agosto de 2011, hasta el 1° de junio del 2012, en consecuencia, se conceda y pague el retroactivo pensional a sus herederas OMAIRA MARÍN HOYOS (cónyuge), y a sus hijas SANDRA CRISTINA, PAULA ANDREA, JOHANNA PATRICIA, VALENTINA, y MARÍA CAROLINA HERNÁNDEZ MARÍN, junto con los intereses moratorios, y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su vocera judicial (fls. 60 al 68), manifestando frente a los hechos allí expuestos, que son ciertos aquellos que aluden a las reclamaciones pensionales adelantadas por el pensionado fallecido MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES, así como la existencia y contenido de los actos administrativos expedidos por la entidad para dar respuesta a lo solicitado, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“inexistencia de la obligación de reconocer retroactivo de pensión de vejez a las demandantes; prescripción; improcedencia de reconocimiento sin descuentos en salud; improcedencia de la indexación; buena fe; imposibilidad de condena en costas; y compensación”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el juez a-quo en audiencia pública celebrada el día 3 de septiembre de 2019, declaró probada la excepción de prescripción formulada por la apoderada judicial de COLPENSIONES, a quien absolvió de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por las señoras OMAIRA MARÍN HOYOS, SANDRA CRISTINA, PAULA ANDREA,

JOHANNA PATRICIA, VALENTINA, MARÍA CAROLINA HERNÁNDEZ, en calidad de herederas determinadas del señor MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES.

Finalmente impuso las costas del proceso a cargo de la parte demandante, y a favor de COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho la suma de \$621.115 equivalente al 5% del retroactivo solicitado.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que el pensionado fallecido MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES si acreditó el retiro del sistema general de pensiones, a partir del 31 de julio de 2011, al haber registrado la novedad “P”, que significa un retiro del sistema general de pensiones, mas no del subsistema de salud, y que en tal virtud le asistía derecho a percibir la pensión de vejez a partir del 1° de agosto de 2011, no obstante, en atención a la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada, debe colegirse que la acción judicial para reclamar el retroactivo pensional se encuentra prescrita, al haber transcurrido mas de 3 años entre la fecha de notificación del acto administrativo que negó el retroactivo pensional (11 de febrero de 2015) y la fecha de presentación de la demanda (8 de junio de 2018).

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La apoderada judicial de las demandantes, dice estar conforme frente a lo resuelto en la primera instancia, esto es, haber declarado probada la excepción de prescripción de la acción, para solicitar el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, sin embargo, dice oponerse a la condena en costas procesales, indicando que la misma resulta improcedente en el sub lite, en atención a las condiciones socio económicas de la señora OMARIA MARÍN HOYOS, pues según la recurrente se trata de una persona de escasos recursos, que no tiene como asumir esta condena, pues su única fuente de ingreso es la pensión que le dejo causada su cónyuge MARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ GRAJALES.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA portador de la T.P. N° 209.067 del C. S de la J., presentó sus alegatos de conclusión en esta instancia, solicitando se confirme la absolución impartida por el *A Quo*, toda vez que al ser verificada la historia laboral del causante se pudo observar que en el último período de aportes realizado al sistema general de pensiones (07-2011), fue cotizado como trabajador dependiente para el empleador CONTEGRAL S.A; sin que medie en el sistema novedad de retiro (R) en este período, y por ende el reconocimiento de la prestación se encuentra ajustada a derecho, es decir, a la fecha de inclusión en nómina, dado que la novedad distinguida con la letra (P) registrada en ese mismo periodo no implica el pago de la retroactividad pensional.

Al referido apoderado judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Condena en costas procesales, criterio objetivo para su imposición: Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar si existe alguna causal o motivo para exonerar a la parte demandante de la condena en costas procesales impuesta en la primera instancia, con fundamento en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y

seguridad social en virtud de la analogía normativa permitida por el art. 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver, debe recordarse que las costas del proceso consisten en una erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados, tal es el caso de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, expedición de copias, etc, y hace referencia genérica a todos los gastos surgidos en el curso de aquel. Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho, y para para su fijación por el juez “...*deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...*” (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

Visto lo anterior, es claro entonces que el art. 365 del Código General del Proceso, consagra un CRITERIO OBJETIVO que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis. Así lo precisó la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en memorable sentencia del 21 de septiembre de 1988, de la cual fue ponente el Magistrado José Alejandro Bonivento Fernández:

“...Para la condenación en costas –ha dicho la Corte– “...el legislador tomó inicialmente, el criterio subjetivo, conforme al cual la imposición se subordina a la malicia o temeridad con que actuara la parte en el proceso. Posteriormente la doctrina moderna, y en ella nuestra actual ley procesal (art. 392, num 1 del C. De P. C.), ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, o sea que las costas corren en todo caso a cargo del vencido,

abstracción hecha de su intención y de su conducta en el trámite del proceso...” (Sentencia de 5 de febrero de 1980 no publicada oficialmente); significa esto en otras palabras, que la regla contenida en dicho artículo posee un alcance general con aplicación forzosa a todos los procesos, comprendiendo desde luego las vicisitudes que a estos les son propias, pues se trata sin duda de una disposición de aplicación imperativa y consecuentemente obligatoria...”.

Criterio que también hizo suyo la Corte Constitucional, como se puede apreciar en Sentencia de Constitucionalidad N° C-089 del 13 de febrero de 2002, M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, y mas recientemente por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como es el caso de las providencias con radicación 41.233 del 14 de junio de 2011, M.P. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA y AL4804-2016 del 27 de julio de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, en esta ultima se preciso frente al tema lo siguiente:

“...De ahí que la motivación del peticionario en el sentido de que la situación económica de su prohijado es deficitaria, no sirve de fundamento para exonerar de las costas a la parte vencida, pues la fijación de las respectivas tarifas por la autoridad competente, está sustentada sobre criterios objetivos y no sobre consideraciones subjetivas como las que propone el objetante...”

Tesis jurisprudencial que acoge y comparte esta judicatura, y dado que las pretensiones de la demanda fenecieron ante la excepción de prescripción formulada por la entidad accionada, no le cabe duda a esta judicatura que la parte demandante debe ser condenada al pago de las costas procesales tal como se indicó en la providencia recurrida, pues al interior de nuestro sistema legal no existen normas que consagren la absoluta gratuidad de la justicia. Así se precisó en providencia CSJ AL, 26 oct, 1999, rad. 12.224, reiterado en el AL1570-2013, al que pertenecen los siguientes apartes.

“No contiene la Constitución Nacional norma que consagre de manera absoluta la gratuidad de la justicia. Antes por el contrario el artículo 6º de la Ley 270 de 1996 dispone: “La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costas judiciales.”

Por lo anterior, se dispone acoger el criterio expuesto por el juez A-Quo, y en consecuencia, se ha de CONFIRMAR la sentencia recurrida por estar ajustada a derecho, y no existir a favor de las personas que integran la parte demandante un amparo de pobreza que impida la condena en este sentido, solicitud que en todo caso debía elevarse bajo la gravedad de juramento, y directamente por interesado exponiendo las circunstancias bajo las cuales se encuentra y que le impiden asumir las cargas económicas para atender el proceso.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, las costas procesales en esta instancia también estarán a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000).

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000).

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N °
045 del 15 de marzo de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>